

**Arias Palacio**

*Abogados Asociados*

*Especialistas en*

*Derecho Administrativo, Tributario, Aduanero y del Transporte*



Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LA SOCIEDAD EDUARDO BOTERO SOTO S.A. CONTRA LA NACION – SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – RESOLUCIÓN No. 015952 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 – SANCIÓN POR EXCESO EN EL PESO DE LA CARGA TRANSPORTADA EN CUANTÍA DE \$8.569.600,00.

ADAULFO ARIAS COTES, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 17.007.242 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 17.802 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de Apoderado Especial de la sociedad EDUARDO BOTERO SOTO S.A., NIT 890.901.321 5, domiciliada en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, constituida mediante Escritura Pública No. 6.800 del 14 de octubre de 1947, corrida en la Notaria Cuarta del Círculo Notarial de Medellín, mandato y condiciones que pruebo con Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur y con poder legalmente conferido por el Representante Legal de la mencionada sociedad, documentos que acompaño a este libelo con el debido comedimiento ante el señor Juez Administrativo, en ocasión del término legal y en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 138 siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ocurro a presentar demanda encaminada a que por el trámite del procedimiento ordinario regulado por el Título XV del mencionado Código, con audiencia del Procurador y del señor Superintendente de Puertos y Transporte o de la persona que éste designe o haga sus veces, se acojan en Sentencia definitiva las peticiones que se harán subsiguientemente a los hechos y fundamentos del derecho que paso a exponer y a los documentos que relacionaré.

## HECHOS

1. Como cabeza del procedimiento para sancionar, la Superintendencia de Puertos y Transporte utiliza el Informe de Infracciones de Transporte No. 183341, del 25 de enero del 2011, en cuyas observaciones se identifica a la empresa Eduardo Botero Soto y Cia Ltda como expedidora del manifiesto No. 3050027201100094486, documento que sirve de base probatoria para imponer la sanción tal como se desprende de la siguiente transcripción de la Resolución No. 00020788 del 10 de diciembre del 2014, expedida por el Superintendente de Puertos y Transporte: *"Por lo tanto, es claro que de ellos se desprenden unos hechos tales como: el sobrepeso y el transporte de la carga que la genera en un vehículo afiliado a la empresa investigada, circunstancias que en un conjunto invierten la carga de la prueba para la empresa investigada, toda vez que es a ella a quien se le impone desvirtuar los mentados hechos que constituyen un indicio de su responsabilidad y deben tenerse como prueba al ser apreciados en su conjunto pues guardan una armonía entre ellos, es decir, entre los hechos contenidos en el comparendo y en el ticket de pesaje, pues se aprecia de ellos que en uno se reporta una sobrecarga y en el otro la infracción cometida por este hecho.*

*Así las cosas, es necesario reiterar que en los folios 1 y 2 del expediente obran las pruebas que permitan determinar que el vehículo de placas SWM-663, está vinculado a la empresa TRANSPORTES BOTERO SOTO con NIT 890.901.321-5. A su vez, el ticket de báscula de fecha 25 de enero de 2011 de la Báscula Media Canoa Norte en el comparendo bajo el registro No. 183341 de la misma fecha permite establecer que el vehículo llevaba sobrepeso. Igualmente, la orden del comparendo que contiene la*



manifestación o informe que hace el agente de policía de carreteras, no fue tachado de falso y no se aportó prueba que lo controvierta dentro de las oportunidades de defensa que tuvo la empresa investigada, lo que constituye un indicio claro y suficiente en contra de la misma."

2. El indicio utilizado para justificar el proceso sancionatorio, es atacado en el Recurso de Reposición y Subsidiario de Apelación entre otros, con el siguiente argumento: "Por lo anterior, la empresa de transporte no estaría incurso en dicha infracción, cuando ésta no es la que esté efectuando la operación de transporte, pues la misma no tendría la capacidad de incurrir en alguno de estos verbos rectores tipificadores de la infracción, o cuando habiendo efectuado la operación no hubiese incurrido en alguna de estas conductas.". Empero, el documento prueba del indicio, también es prueba indiciaria que el vehículo que transportó la carga se encontraba solo bajo la figura de encargo a terceros, donde la sociedad de Eduardo Botero Soto y Cia Ltda, tenía la calidad de empresa transportadora, y encargó de manera clara y específica, como consta en el Manifiesto de Carga No. 3050027201100094486 del 24 de enero del 2011, el traslado de una mercancía consistente en 690 bultos de azúcar con un peso máximo de 34.500 kilos.

3. La demandante se encuentra habilitada en esta instancia jurisdiccional para mejorar la prueba y por ello, incorporamos prueba expedida por la Dirección Jurídica de la sociedad Eduardo Botero Soto S.A., en la cual se hace constar que el vehículo de placas SWM 663 no se encuentra afiliado a esta empresa, ni para la fecha de enero 25 del 2011. Participamos del criterio expuesto en la Resolución Sancionatoria en el sentido que el Manifiesto de Carga, es plena prueba por ministerio de la Ley y por tanto, certifica que el peso de la mercancía para la cual fue contratada la empresa transportada Eduardo Botero Soto S.A., fue de 34.500 kgs. y no de 34.640 kgs. peso cargado por el remitente, tomado en los actos administrativos acusados, siendo aquel el peso que debió tomarse y no éste por los precisos mandamientos de los artículos 1010 y 1011 del Código de Comercio. Ahora bien, por el principio de legalidad y de taxatividad preceptuado por el artículo 6º de la Constitución Nacional, no es procedente llegar al peso de la mercancía, para efectos de imponer sanción, restando supuesto peso bruto vehicular de 52.890 kgs, el también supuesto peso del vehículo de 18.250 kgs.

En la parte superior de la página 4 del citado acto administrativo se indica que el "... peso total bruto vehicular de 52.890 kilos", es el producto de sumar el supuesto peso de la mercancía de 34.640 kgs. con el supuesto peso de \$18.250 kilos que pesa el vehículo. El peso bruto vehicular, por disposición del artículo 8 del Decreto 004100 del 28 de diciembre del 2004, en lo que se refiere a los vehículos 3S3, debe establecerse así:

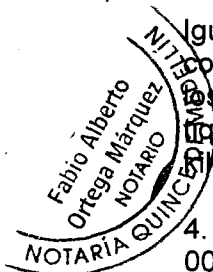
Máximo peso bruto vehicular	52.000 kgs.
Tolerancia positiva de medición	<u>1.300 kgs.</u>
Total peso bruto vehicular ordenado por el precepto	53.300 kgs.

En consecuencia, no hay ninguna inexactitud que justifique la sanción impuesta en los actos administrativos acusados, pues, el peso bruto vehicular sobre el cual se hizo responsable la sociedad Eduardo Botero Soto S.A. conforme contrato suscrito con el usuario, en ningún momento determinaba el transporte de mercancía que superara el peso máximo autorizado por la Ley, es más, éste se encontraba dentro de la tolerancia autorizada por las normas que regulan la materia, por cuanto los 52.750 kgs, son inferiores a 53.300 kgs., establecido así:

Peso de la mercancía informado en el Manifiesto de Carga	34.500 kgs
Peso del vehículo fijado por Almagrario S.A.	<u>18.250 kgs.</u>
Total peso vehicular	52.750 kgs.







Igual suerte ocurre con los pesos indicados al momento de salida del vehículo contratado en donde se registro un peso bruto vehicular que se encontraba dentro de los rangos máximos permitidos, es decir, dentro de los 53.300 kilos, por cuanto el ticket denominado Orden de Carga de Almagrario indica un peso máximo de 52.890 kilos.

4. El peso de 52.750 kgs responde a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004, por cuanto dispone lo siguiente: **"ARTÍCULO 8°: - PESO BRUTO VEHICULAR** – El peso bruto vehicular para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional debe ser establecido en la siguiente tabla:

Vehículos	Designación	Máximo PBV, kg	Tolerancia positiva de medición kg.
Camiones	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
Tracto-camión con semirremolque	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	(...)	(...)	+ -- (...)
	3S3	52.000	+ -- 1300

"... debe quedar claro que la misma empresa admite que desde el origen cargó el vehículo con 52.890 kg, ...". Lo transcrito constituye desviación de poder sino también falsa motivación, pues, arriba quedó demostrado que no es cierto y por tanto es falso que la empresa demandante admita que fue contratada para transportar 52.890 kilos, cuando el número de bultos declarados para ser transportados era de 670 bultos con un peso bruto de mercancía de 33.500 kilos más 18.250 kilos del peso del vehículo para un total de peso bruto vehicular de 51.750 kilos, el cual se encuentra dentro del rango de los 52.000 kilos permitidos. En consecuencia, mal se puede decir que la sociedad Eduardo Botero Soto S.A., permitió, facilitó o autorizó el transporte de mercancía que superaran el peso máximo permitido.

"... queda en evidencia que la transportadora actuó con negligencia, pues cargó el vehículo con un peso superior al máximo autorizado, ...". El cargo es arbitrario por la disposición de los artículos 1011 y 1010 del Código de Comercio, ya que por el primero, parte final de su inciso 1° "El transportador no está obligado a examinar si dichos informes o documentos son exactos o suficientes.", respecto al hecho que el remitente está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas, los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las formalidades de policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo, y por el segundo, inciso 1° "El remitente indicará al transportador a más tardar al momento de la entrega de la mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características de las cosas, ..."

5. Los hechos narrados demuestran palmariamente la vulneración del debido proceso y el principio de legalidad consagrado por el artículo 6° de la Constitución Nacional, del cual se desprenden los principios de tipicidad y de taxatividad, merced a



que el numeral 560 del artículo 1 de la Resolución 010800 del 2003 estatuye como sanción a las empresas de transporte público terrestre automotor de carga **“permitir, facilitar, estimular, propiciar, autorizar, o exigir el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, sin portar el permiso correspondiente.”** Eduardo Botello Soto S.A. no ejecutó ninguna de las acciones de los verbos rectores señalados

precepto transcrito y por consiguiente el Honorable Tribunal debe declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Está agotada la vía gubernativa. En efecto, en el artículo 4º de la Resolución 00020788 del 10 de diciembre del 2014 se advierte que contra este acto administrativo “... no procede recurso alguno.”

### DISPOSICIONES VIOLADAS

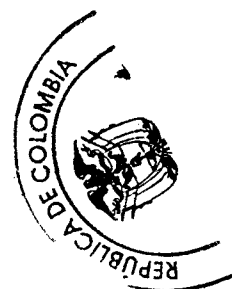
Las actuaciones o actos acusados violan las normas del preámbulo y de los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 95, 228, 230, 241 y 243 de la Constitución Nacional; artículos 1, 2, 3, 10, 40, 41, 42, 102, 137, 138 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; artículos 6, 46 y 50 de la Ley 336 de 1996; artículos 1010 y 1011 del Código de Comercio; artículos 8 y 9 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004; numeral 560 del artículo 1 de la Resolución 010800 del 12 de diciembre del 2003.

### CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento de que trata la presente demanda, se justifica con fundamento en las normas jurídicas antes citadas y el concepto de la violación y aplicación de ellas que a continuación se hace:

Artículos 2, 4, 6, 13, 29, 58, 83, 90, 95, 228, 230, 241 y 243 de la Constitución Nacional; artículos 1, 2, 3, 10, 40, 41, 42, 102, 137, 138 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; artículos 6, 46 y 50 de la Ley 336 de 1996; artículos 1010 y 1011 del Código de Comercio; artículos 8 y 9 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004; numeral 560 del artículo 1 de la Resolución 010800 del 12 de diciembre del 2003.

**VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL PRECEDENTE.** – La Jurisprudencia Constitucional ha evolucionado respecto a las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales, destacando como causal de la acción todos los casos en que los Jueces se apartan de los precedentes jurisprudenciales, sin argumentar y cuando “... su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados...”. En sentencia de tutela, unificadora T – 189 del 3 de marzo del 2005, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, la Honorable Corte Constitucional afirma sobre la obligación de aplicar el precedente lo siguiente: ““(...) La Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no (...) solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución. En este caso (T1031/2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes





aplicables al caso o cuando 'su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados'.

Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a reemplazar '(...) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.' Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,".

El precedente jurisprudencial y su fuerza vinculante emana del artículo 4º de la Constitución Nacional, por cuanto pregonan la supremacía de la Constitución, en forma que no puede existir en el territorio de la República de Colombia, norma y las sentencias y los actos administrativos lo son, que le sean incompatibles con el derecho de igualdad ante la Ley consagrado en su artículo 13 por cuyo imperio todas las personas del territorio de la República, tiene el derecho absoluto a que se les apliquen las sentencias "... cuya identidad de hecho y de derecho coincide con el caso objeto de estudio, ..." por configurarse "... el precedente para resolver el caso concreto."; del deber de sujeción de todas las autoridades públicas a la Constitución postulado por su artículo 123; del debido proceso consagrado como derecho fundamental por el artículo 29 de la misma Constitución, como garantía que en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se observarán a plenitud las formas propias de cada juicio; y del principio de la buena fe consagrado por su artículo 83, al cual por sus mandamientos deben ceñirse las actuaciones de las autoridades públicas.

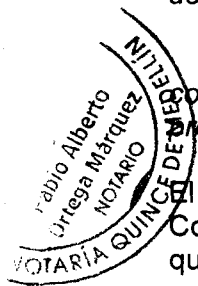
Acerca del significado de los términos jurisprudencia y precedente, la Honorable Corte Constitucional en Auto 223 del 16 de agosto del 2006, magistrado ponente Jaime Córdoba Treviño ilustra en los términos que me permito transcribir: "*En consecuencia, el precedente es lo que análogamente se ha llamado jurisprudencia en vigor, doctrina constitucional vigente, jurisprudencia constitucional o línea jurisprudencial consolidada, pues frente a casos similares se hace imperativo emplear una única regla que ha sido reiterada de manera uniforme por la Corte Constitucional. Mientras la jurisprudencia, adquiere un sentido amplio que enmarca la producción jurídica de los jueces en cualquiera que sea su especialidad. Pese a que, como se anotó, en algunas oportunidades su significado ha sido equivalente al del precedente.*

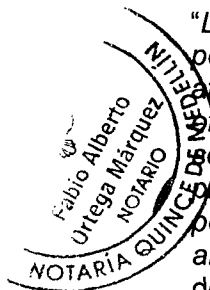
Lo anterior se puede ejemplificar de la siguiente forma: la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado en numerosas oportunidades el tema del derecho a la salud en conexidad con la vida. En particular, para resolver sobre el suministro de medicamentos y servicios médicos no incluidos en el plan obligatorio de salud, la Corte ha reiterado en múltiples sentencias que se deben cumplir cuatro requisitos, por lo que solo las sentencias cuya identidad de hecho y de derecho coincida con el caso objeto de estudio, configurarían el precedente para resolver el caso concreto.

Por lo tanto, esta corporación considera que el alcance vinculante para el juez constitucional del precedente, de la jurisprudencia consolidada, de la jurisprudencia constitucional o de la doctrina constitucional vigente son idénticos, comoquiera que en ellos está inmersa la regla de la decisión aplicable a un determinado caso. Por el contrario, como se mencionó, la jurisprudencia en sentido amplio hace referencia a todas las sentencias que profiere, en nuestro caso, la Corte Constitucional.

En suma, el precedente o cualquiera de los términos similares que se han empleado para homologar su significado, son un elemento de la jurisprudencia cuyo desconocimiento en una sentencia posterior puede ocasionar la nulidad de la misma. Bajo tales presupuestos, se hace necesario diferenciar, como se verá más adelante, entre la ratio decidendi y el obiter dicta de una sentencia, con el propósito de definir un posible escenario de nulidad."

Por todo lo anterior, considero constitucionalmente obligatorio la aplicación del precedente, a menos que el Juez en su autonomía con razonamientos ajustados a la Constitución, demuestre su inaplicabilidad al caso concreto, lo cual constituye cambio jurisprudencial autorizado por la misma Constitución, por cuanto surge de ella, no un





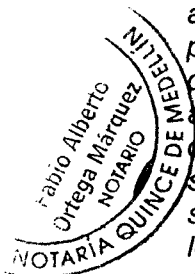
derecho estático sino viviente, merced al carácter de estado social de derecho que ella estructura. La supremacía constitucional expresada en el precedente, está concretada en el artículo 114 de la Ley 1395 del 12 de julio del 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, de modo imperativo, ya que dispone: "Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscritos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.". La norma transcrita, es derogada en materia administrativa a partir del 1º de julio del 2012 por el artículo 10 de la Ley 1437 del 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, merced a que establece lo siguiente: **"Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia.** Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas."

Sobre el precedente constitucional la Honorable Corte Constitucional en sentencia C - 104 del 11 de marzo de 1993, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, predica lo que me permito transcribir: "La interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y alcance de los preceptos de la carta y hace parte, a su vez, del "imperio de la ley" a que están sujetos los jueces según lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución." La Honorable Corte Constitucional ha interpretado el artículo 29 de la Constitución Nacional que consagra al debido proceso como un derecho fundamental aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, en múltiples sentencias, en número superior a las cinco (5) sentencias remitidas por el transcrito artículo 114 de la Ley 1395 del 2010, para predicar que de esa norma constitucional se desprende el debido proceso administrativo, pues, en su respetado concepto es la materialización del principio de legalidad, ya que, por este principio la actuación administrativa o el acto administrativo debe ser surtido o expedido en la forma y modo que lo determina el Ordenamiento Jurídico. Precisamente con fundamento en el citado artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 102 de este Código dispone en su inciso 1º lo siguiente: **"Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.** Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos."

Los actos administrativos cuya nulidad se pide en esta instancia, violan el precedente constitucional establecido por la Honorable Corte Constitucional en las sentencias cuyas partes fundamentales transcribo a continuación, por vulneración de facto del debido proceso administrativo.

La Honorable Corte Constitucional con la autoridad atribuida por la Constitución Política de Colombia ha definido el debido proceso administrativo como aquel que "... comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales.", y lo ha aplicado en reiteradas sentencias de las cuales me permito transcribir las partes fundamentales de las siguientes:





Sentencia T – 796 del 21 de septiembre del 2006, magistrado ponente Clara Inés Vargas Hernández: **“Debido proceso administrativo.** “El debido proceso administrativo “comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales”. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad, según el cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico.

Siendo desarrollo del principio de legalidad, el debido proceso administrativo representa un límite jurídico al ejercicio del poder político, en la medida en que las autoridades públicas únicamente podrán actuar dentro de los ámbitos establecidos por el sistema normativo, favoreciendo de esta manera a las personas que acuden ante quienes ha sido investidos de atribuciones públicas.”

Sentencia de Constitucionalidad C – 893 del 1º de noviembre del 2006, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra: **“Cobertura del debido proceso.** “En esa misma línea, la Sala Cuarta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional sostuvo, por ejemplo, que la cobertura del debido proceso “se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cubre todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a **los procesos que adelante la administración** con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos (resalto fuera del original).

Criterio similar acogió la Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional al admitir que, como manifestación del principio de legalidad, el principio del debido proceso administrativo se convierte en una limitante de las potestades asignadas a las autoridades administrativas, que busca canalizar su comportamiento de conformidad con parámetros preestablecidos, en aras de preservar los derechos ciudadanos del abuso que el ejercicio de dichas competencias puede propiciar.”

Sentencia T – 208 del 28 de febrero del 2008, magistrado ponente Clara Inés Vargas Hernández: **“Debido proceso dentro de las actuaciones administrativas.** “La Constitución Política, en el artículo 29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Como lo ha reconocido esta corporación, el debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata (C.N., art. 85), que en relación con el desarrollo de las actuaciones administrativas, pretende regular el ejercicio de las potestades de la administración, cuando en virtud del inicio de las mismas puedan llegar a comprometerse los derechos de los administrados.

En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación, ha definido el debido proceso administrativo como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley.

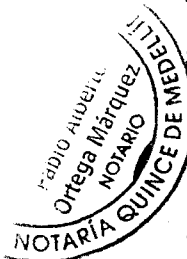
(...).

De acuerdo a lo expuesto, se ha entendido que el debido proceso administrativo consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda





competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión (C.N., arts. 4º y 122). En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico”



Sentencia T – 555 del 7 de julio del 2010, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio: **“El debido proceso administrativo.** “(...) se destacan las siguientes conclusiones: (i) el derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional, ya que se encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este derecho involucra todas las garantías propias del derecho al debido proceso en general, como son, entre otras, los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la administración; (iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe solamente para impugnar una decisión de la administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación; (iv) el debido proceso administrativo debe responder no solo a las garantías estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, como son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; (v) la adecuada notificación de los actos administrativos de carácter particular tiene especial importancia para garantizar el derecho al debido proceso administrativo, y los principios de publicidad y de celeridad de la función administrativa; (vi) como regla general las actuaciones administrativas de carácter general o particular están reguladas por el Código Contencioso Administrativo, pero existen “procedimientos administrativos especiales” que, según lo indica el artículo 1º del mismo código, se regulan por leyes especiales”.

Sentencia T – 656 del 30 de agosto del 2010, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio: **“Debido proceso administrativo. Concepto.** “Del debido proceso administrativo busca garantizar que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependan de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”. En tal sentido, este derecho se materializa como una derivación del principio de legalidad de acuerdo con el cual “toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión” (C.N., arts. 4º y 122).

Para dar un desarrollo más amplio al concepto del debido proceso administrativo, es necesario tener presente que el Estado es el que debe ajustarse a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante la administración, evitando de este modo que los administrados queden a la deriva de una decisión arbitraria u omisión de una actuación a causa de dilaciones injustificadas”

Es procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, porque en ellos se desconoce el precedente sobre el debido proceso administrativo sentado en las jurisprudencias arriba transcritas, el cual es de forzoso cumplimiento en lo que atañe a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional por virtud de lo preceptuado por el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Colombia, como quiera que por su imperio hacen tránsito a cosa juzgada constitucional los fallos que la corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional, y por mandamiento expreso del artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto manda tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Observo que en sentencia de constitucionalidad del 1º de noviembre del 2011, la Honorable Corte Constitucional declara omisión legislativa en las disposiciones del citado artículo 114 de la Ley 1395 del 2010, por referirse él únicamente a los precedentes jurisprudenciales de la justicia ordinaria y de la jurisdicción contencioso





administrativa, con lo cual se excluía el precedente jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, y por tal razón, declaró esta Honorable Corporación la obligatoriedad para los Jueces y los funcionarios del sector público en la aplicación de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a punto que, ésta califica como prevaricato por acción la inaplicabilidad de esos precedentes. En las sentencias anteriormente transcritas insiste el antecedente jurisprudencial en establecer la obligatoriedad y cumplimiento del debido proceso administrativo, lo cual para el caso puesto a la consideración del señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (Reparto), se cifra en el hecho que conforme a sentencia reiterativa del Honorable Consejo de Estado, el cumplimiento del procedimiento estatuido en la Ley materializa el principio de legalidad preceptuado en el artículo 6º de la Constitución Nacional, y por ello, se vulneran los mandamientos de esta norma constitucional en todos los casos en que se incurra en vía de hecho por defecto sustantivo o fáctico, como ocurre en el caso puesto a la consideración del señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

En relación con el precedente constitucional, la Honorable Corte Constitucional en Auto 223 del 16 de agosto del 2006, magistrado ponente Jaime Córdoba Treviño afirma: "... En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no. En este sentido, en el análisis de un caso deben confuir los siguientes elementos para establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no:

i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente.

ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante.

iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que "cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente.

Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla – prohibición, orden o autorización – determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes".

Las sentencias de la Honorable Corte Constitucional anteriormente transcritas, son vinculantes, y por ende, constituyen un precedente aplicable al caso puesto a la consideración del señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, toda vez que la ratio de esas sentencias confluyen en la regla del debido proceso aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas por disposición del artículo 29 de la Constitución Nacional, por cuyos mandamientos deben observarse a plenitud las formas propias de cada juicio. Esa regla del debido proceso es determinante para resolver el caso puesto a la consideración del señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, pues, tienen el carácter de tales las establecidas en las normas que por haber sido violadas en los actos y actuaciones administrativas acusados, son comentadas a continuación:

Los hechos de esta demanda certifican la vulneración del debido proceso consagrado como derecho fundamental por el artículo 29 de la Constitución Nacional, dado a que por su imperio debe ser aplicado en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Forman parte esencial de su núcleo el derecho fundamental de defensa y el principio de la seguridad jurídica, amparados por el inciso 2º de la norma cuando dispone: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto



que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El artículo 50 de la Ley 336 de 1996, cumple los objetivos de la norma constitucional, por cuanto textualmente prescribe:

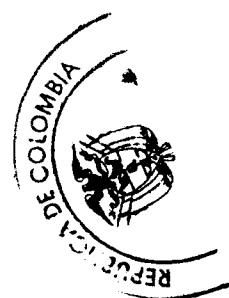
"Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:

Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos.

- b) Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación.
- c) Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la santa crítica."

El Informe de Infracciones de Transporte No. 183341 del 25 de enero del 2011, certifica la ocurrencia en esta fecha de supuesta infracción a las normas de transporte y el hecho que en la misma fecha la autoridad competente tuvo conocimiento de la supuesta infracción. Sin embargo, el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, el 15 de octubre del 2013, expidió la Resolución 12568 para abrir investigación sancionatoria administrativa a la empresa de transporte público terrestre automotor Eduardo Botero Soto y Cia Ltda, por la presunta transgresión de lo dispuesto en el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo normado en el Código 560 Infracción del artículo 1º de la Resolución 10800 del 2003. Salta a la vista la vulneración del debido proceso, por violación de la regla procedimental del artículo 50 de la Ley 336 de 1996, ya que por sus precisos mandamientos, debe hacerse en forma inmediata mediante Resolución Motivada, la apertura de la investigación cuando la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la supuesta infracción. La simple confrontación de a fecha de ocurrencia de la supuesta infracción, el 25 de enero del 2011, con la fecha de expedición de la Resolución que abre la investigación, el 15 de octubre del 2013, arroja como resultado que la investigación se abrió 2 años, 8 meses y 20 días después de la ocurrencia de la supuesta infracción y por consiguiente, en la Resolución 12568 del 15 de octubre del 2013 y consecuencialmente en los actos administrativos cuya nulidad se impetra, se incurre en vía de hecho por defecto sustantivo y fáctico que amerita la declaratoria de su nulidad.

Por la regla del debido proceso la aplicación del principio de legalidad o taxatividad es de aplicación obligatoria en el campo del derecho administrativo sancionatorio y en consecuencia, debe ser aplicada en el caso puesto a la consideración del Honorable Tribunal, por lo cual debe ser respetado en estricto dado a que "... incorpora el respeto al principio de legalidad o de la taxatividad conforme al cual la conducta censurada debe encajar en la precisa descripción normativa que plasma la infracción previamente definida por el Legislador, sin que sea dable responsabilizar al administrado sometido al impurium del ius puniendo, por interpretación extensiva del precepto sancionatorio a aplicar.". El numeral 560 del artículo 1º de la Resolución 010800 del 12 de diciembre del 2014, define la infracción al establecer como sanción a las empresas de transporte público terrestre automotor de carga: "Permitir, facilitar, estimular, propiciar, autorizar, o exigir el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, sin portar el permiso correspondiente." La acción de los verbos tipifica la infracción, de modo que esta no se configura porque la sociedad actora no permitió, ni facilitó, ni estimuló, ni propició, ni autorizó como tampoco exigió el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, dado a que el Manifiesto de Carga es prueba plena y suficiente del hecho que alzó la mercancía con conocimiento y convicción que ésta tenía el peso





de 34.500 kgs. informado por el remitente, para lo cual se encuentra y se encontraba amparada en las prescripciones de los artículos 1010 y 1011 del Código de Comercio, y en las reflexiones que al respecto desarrolla la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C – 559 de 1999, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, cuando expresa:

“... constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativa de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales. De esta manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal (...)

14- Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y alcances. Así, la más natural es la reserva legal, esto es, que la definición de las conductas punibles corresponden al Legislador, y no a los jueces ni a la administración, con lo cual se busca que la imposición de penas derive de criterios generales establecidos por los representantes del pueblo, y no de la voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo (...).

Si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa, entonces tampoco se protegen la libertad jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de manera muy diversa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Según esa concepción que esta Corporación prohija, solo de esa manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantística y democrática, pues solo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto, únicamente si las descripciones penales son taxativas pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se le imputa. Por eso esta Corporación ya había destacado, en anteriores oportunidades la importancia de este principio de taxatividad o estricta tipicidad. Dijo entonces esta Corporación:

‘Este principio busca que las personas a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. Con la tipicidad se desarrolla el principio fundamental ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva: en principio se debe pues evitar la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria ...’

17.- El principio de estricta legalidad o taxatividad tiene entonces dos implicaciones naturales: (i) la prohibición de la analogía in malam partem y (ii) la proscripción de los tipos penales ambiguos. En efecto, si se permite o se ordena al juez aplicar analógicamente un tipo penal, o si la descripción penal no es inequívoca sino ambigua, entonces el respeto al principio de legalidad es puramente formal, y pierde gran parte de su sentido garantista, pues los ciudadanos no sabrán con exactitud, y





de manera previa, cuáles son las conductas prohibidas (...) Por ello esta Corporación había indicado que la constitución prohíbe la vaguedad o ambigüedad de las normas penales (...)

18.- Todo lo anterior muestra que, por paradójico que suene, en materia penal el principio de legalidad vincula no sólo a los jueces sino también al propio legislador pues el principio constitucional consagra un doble mandato: así, ordena a los jueces que solo sancionen conductas previamente establecidas en la ley, pero a su vez, impone al Legislador de definir de tal manera las conductas punibles, que éstas sean inequívocas y empíricamente verificables (...).

La tolerancia positiva de medición en kilogramos prevista en el artículo 8 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004, releva la importancia de la tipicidad para la configuración de la infracción, pues, prevé la diferencia en la medición que puede resultar de la comparación de los aparatos o elementos empleados para la misma, disimilitud que es identificada en el citado artículo como tolerancia positiva de medición y que para los vehículos 3S3 es establecida en 1.300 kilogramos, por tanto, por fuerza del principio comentado, para imponer sanción por el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, tratándose de vehículos 3S3 como peso bruto vehicular debe tomarse en todos los casos sin excepción, 52.000 kgs como peso bruto máximo vehicular más la tolerancia positiva de medición de 1.300 kgs., para un total de 53.300 kgs. Por todo lo expuesto, habiéndose probado que la sociedad demandante alzó la mercancía con la información que pesaba 34.500 kgs, y tenido en cuenta que según la Orden de Cargue de Mercancía No. 366298 de Almagrario, el vehículo pesaba 18.250 kgs, se tiene que en el momento de la alza de la mercancía, el peso bruto vehicular era de 52.750 kgs., resulta incontrovertible el hecho que la demandante no incurrió en la infracción que le es imputada, dado a que el peso bruto vehicular autorizado para los vehículos 3S3, incluida la tolerancia positiva de medición en kilogramos es de 53.300, toda vez que por los mandamientos del comentado artículo 8 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004, el peso bruto vehicular para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional debe ser establecido sumando al máximo peso bruto vehicular la tolerancia positiva de medición en kilogramos.

Por otra parte, tampoco se tipifica la infracción por el mandato del artículo 9 de la Resolución 004100 del 28 de diciembre del 2004, como quiera que fija el máximo peso por eje para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional, el cual debe ser establecido conforme a la tabla en él consignada.

La tabla contiene:

Tipo de eje	Peso máximo por eje, kg
Eje sencillo	
Dos llantas	6.000
Cuatro llantas	11.000
Eje tandem	
Cuatro llantas	11.000
Seis llantas	17.000
Ocho llantas	22.000
Eje tridem	
6 llantas	16.500
8 llantas	19.000
10 llantas	21.500
12 llantas	24.000

El vehículo 3S3 tiene 22 llantas, por lo cual su peso vehicular debe ser establecido tomando como peso máximo por eje 24.000 kgs, motivo por el cual multiplicando este peso por 3 resulta un peso bruto vehicular de 72.000 kgs. La exposición antecedente es demostrativa que la sanción es impuesta con base en interpretación realizada por quien la establece, lo cual vulnera de facto el principio de legalidad o de taxatividad que hace procedente la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados.



Los hechos fácticos y jurídicos expuestos en la presente demanda, sin lugar a dudas permiten establecer la nulidad de los actos administrativos, por cuanto los mismos adolecen de una falsa motivación en el sentido de que las pruebas y documentos sobre los cuales se sustenta la decisión administrativa, fueron indebidamente valorados y aplicados al caso concreto, soslayando de manera ilegal la legislación que regula la materia buscando a través de dicha interpretación generar una concordancia entre las conductas descritas como contrarias a la Ley, en especial el artículo 1 de la Resolución 10800 del 2003, y las pruebas aportadas por la sociedad actora y las recopiladas dentro del expediente. En consecuencia y con el fin de garantizar el debido proceso violado, en el presente caso en contra de la sociedad Eduardo Botero Soto S.A., el señor Juez Administrativo Judicial de Bogotá deberá revocar en su totalidad los actos administrativos violatorios del acto jurídico colombiano.

### PETICION

Con fundamento en los hechos relacionados, en los documentos acompañados a esta demanda y en las demás pruebas que habrán de pedirse en los términos legales y en las razones de orden jurídico y legal anteriormente invocadas, con el mayor respeto solicito al Señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, se sirva hacer las siguientes declaraciones:

1. Que es nula la Resolución No. 015952 del 26 de diciembre del 2013, expedida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
2. Que es nula la Resolución No. 010337 del 4 de junio del 2014, proferida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
3. Que es nula la Resolución No. 00020788 del 10 de diciembre del 2014, originaria del Superintendente de Puertos y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho lesionado se declare que la sociedad Eduardo Botero Soto S.A. no está obligada al pago de la sanción que le fue impuesta en la cantidad de \$8.569.600,00 y se proceda a la liquidación de los gastos y agencias en derecho preceptuados en la Ley.

### DOCUMENTOS

Se adjuntan con carácter de pruebas, los siguientes documentos:

1. Poder para actuar.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur.
3. Fotocopia simple del Informe de Infracciones de Transporte No. 183341 del 25 de enero del 2011.
4. Fotocopia simple de la Remesa Terrestre de Carga No. 201100094486 del 24 de enero del 2011.
5. Fotocopia simple del Manifiesto de Carga No. 3050027201100094486 del 24 de enero del 2011.
6. Fotocopia simple de la Orden de Cargue de Mercancía No. 366298, expedida por Almagrario.
7. Fotocopia simple de la Resolución No. 12568 del 15 de octubre del 2013, dictada por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.





8. Fotocopia simple de la Resolución No. 015952 del 26 de diciembre del 2013, expedida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
9. Fotocopia simple del Recurso de Reposición y Subsidiario de apelación, radicado con el No. 2014 - 560 - 003567 - 2, el 23 de enero del 2014, en la Superintendencia de Puertos y Transporte del Ministerio de Transporte.
10. Fotocopia simple de la Resolución No. 010337 del 4 de junio del 2014, proferida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
11. Fotocopia simple de la Resolución No. 00020788 del 10 de diciembre del 2014, originaria del Despacho del Superintendente de Puertos y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
12. Original de la certificación expedida por la Dirección Jurídica de la sociedad Eduardo Botero Soto S.A.

#### ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

Bajo juramento que debe entenderse rendido con esta demanda estimo la cuantía a la fecha de su presentación, en la suma de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS (\$11.140.480,00), integrada por los siguientes conceptos:

Agencias en Derecho	\$ 2.570.880,00
Sanción impuesta	<u>\$ 8.569.600,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.140.480,00</b>

#### SOLICITUD PREVIA

El parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado, deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder. No obstante, para la seguridad de esta demanda contencioso administrativa, si el señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, reputase no estar suficientemente certificada la autenticidad de las copias que se acompañan a esta demanda, con el mayor respeto solicito se requiera de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el envío de los antecedentes administrativos y especialmente de copias certificadas de la Resolución No. 015952 del 26 de diciembre del 2013, dictada por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, de la Resolución No. 010337 del 4 de junio del 2014, expedida por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte y de la Resolución No. 00020788 del 10 de diciembre del 2014, proferida por el Superintendente de Puertos y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte del Ministerio de Transporte.

Se espera confiadamente que en razón de los hechos y fundamentos jurídicos expresados en esta demanda, el señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la admitirá y ordenará que se notifique a la parte demandada que es la Superintendencia de Puertos y Transporte del Ministerio de Transporte.

#### PARTES DEL PROCESO

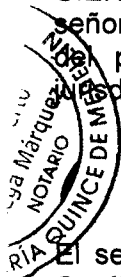
Como quedó expresado, la parte demandada es la Superintendencia de Puertos y Transporte del Ministerio de Transporte, que debe concurrir al proceso por quien legalmente la representa.

La parte demandante es la sociedad Eduardo Botero Soto S.A., con domicilio en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, quien me ha otorgado Poder especial para que la represente en el proceso.



## COMPETENCIA

Por razón de la cuantía, la cual estimo en una suma superior a los ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS (\$11.140.480,00), es competente el señor Juez Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para avocar el conocimiento del proceso, a más de que los actos administrativos fueron expedidos en su jurisdicción.



## PROCEDIMIENTOS

El señalado en el Título V, Capítulos I, II, III y IV y en especial el prescrito en los Capítulos V y VI de ese Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## ACCIÓN

La acción que con el presente proceso se interpone, es la de nulidad y restablecimiento del derecho tratado por el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con petición, con fundamento en sus disposiciones del restablecimiento del derecho lesionado y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la ilegalidad e inconstitucionalidad de los Actos Administrativos impugnados.

## NOTIFICACIONES

La parte demandada oirá notificaciones en las oficinas de las oficinas de la Superintendencia de Puertos y Transporte, localizadas en la calle 63 No. 9 A 45 de la ciudad de Bogotá D.A.

La parte demandante en sus oficinas localizadas en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, en la carrera 42 No. 75 63, teléfono 576 55 13.

El suscrito abogado en sus oficinas de abogado, ubicadas en la carrera 31 No. 25 A 93 de la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

ADAULFO ARIAS COTES  
C.C. 17.007.242 de Bogotá  
T.P.A. 17.602 del C.S. de la J.

# NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO MEDELLIN

Este memorial dirigido a: JUEZ ADTVO DEL CTO JUDICIAL DE  
BOGOTA R  
Fue presentado personalmente ante el suscrito NOTARIO por:

**ARIAS COTES ADAULFO CASIMIRO**

Identificado con: C.C. 17007242

AUT

Tarjeta Profesional No.: 17802 del C.S.J.

Medellin 30/04/2015 a las 09:24:11 a.m.

4nccnrvfcvrc45



BWTL7D1D1W65POTV  
www.notariaenlinea.com



*[Large handwritten signature]*